



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**JUZGADO SESENTA Y CUATRO (64)
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ - SECCIÓN TERCERA**

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veinte (2020)

Juez :	Álvaro Carreño Velandia
Ref. Expediente :	110013066-064-2020-00066-00
Accionante :	Carmen Alcira Rodríguez Rubio
Accionada :	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones

**ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA No. 23**

I. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Procede el Despacho a emitir fallo de primera instancia, dentro de la acción de tutela instaurada por **CARMEN ALCIRA RODRÍGUEZ RUBIO** actuando en nombre propio, en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones - **COLPENSIONES**, a efectos de proteger sus derechos fundamentales de *petición y debido proceso*, presuntamente vulnerados por dicha entidad, en la medida que ésta, según lo aduce, no ha resuelto de fondo la petición radicada el 6 de febrero de 2020 con el radicado 2020_1653186 (fl.4) en la que insistió en la solicitud de cumplimiento de los fallos judiciales de primera y segunda instancia dentro del proceso radicado No. 2016-00150.

II. ANTECEDENTES

2.1. HECHOS Y PRETENSIONES

2.1.1. Mediante petición de fecha 10 de octubre de 2019 radicada bajo el número 2019_13756411 se dio alcance al oficio BZ2019-6037902-2561482 de 2 de septiembre de 2019 donde Colpensiones solicitaba aportar certificación de factores salariales por tiempo laborado en la DIAN entre el 16/07/2013 al 31/01/2015 y se aportaron dichos factores salariales.

- 2.1.2.** En respuesta, Colpensiones hace un nuevo requerimiento de fecha 9 de octubre de 2019 donde solicitó los factores salariales correspondientes al ICBF y otro certificado referido a la DIAN; documental que nuevamente fue aportada a la entidad en escrito de fecha 24 de octubre de 2019.
- 2.1.3.** Nuevamente Colpensiones emitió un nuevo oficio No. 3369416 el día 14 de noviembre de 2019, en donde requirió certificaciones de la vida laboral en la DIAN, ICBF y MINEDUCACIÓN; documentos que fueron aportados en formato CETIL, otorgado por los Ministerios de Trabajo y Hacienda.
- 2.1.4.** El 6 de febrero de 2020 se radicó bajo el número **2020_1653186** una petición donde se solicitó el cumplimiento de fallo de primera y segunda instancia proferida dentro del proceso 2016-0150 que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación, aportando además nuevamente formularios CETIL de la vida laboral de la accionante en DIAN, ICBF y MINISTERIO DE EDUCACIÓN, pese a que el fallo ordenó la reliquidación de la pensión con el último año de servicios y no de toda la vida laboral.
- 2.1.5.** Colpensiones a la fecha no ha dado contestación de fondo a la petición de cumplimiento del fallo judicial.
- 2.1.6.** Por lo anterior, la accionante solicitó la tutela de sus derechos de petición y debido proceso.

2.2. TRÁMITE EN ESTA INSTANCIA

Con auto de fecha 10 de marzo de 2020, se admitió la demanda y se ordenó notificar a Juan Manuel Villa Lora en su calidad de Presidente de Colpensiones.

La anterior decisión se encuentra debidamente notificada a las partes tal como consta a folios 12-14.

2.3. DE LA CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN

Al momento de emisión del presente fallo Colpensiones guardó silencio.

2.4. ELEMENTOS PROBATORIOS

Aportados por la accionante:

- Copia de la petición de fecha 6 de febrero de 2020 radicado 2020_1653186 (fls-4-6).
- Copia de otros documentos de los antecedentes de la presente acción constitucional (fls.7-58).

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

Conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1382 de 2000 y el Decreto 1983 de 2017, este Despacho es competente para conocer y decidir el asunto.

3.2. Procedencia

En el presente asunto, la acción constitucional resulta idónea, habida cuenta que la parte demandante ha invocado la protección de sus derechos fundamentales de petición y debido proceso los que, según lo aduce, han sido vulnerados por Colpensiones, en la medida que ésta, no ha resuelto de fondo la petición radicada el 6 de febrero de 2020 con el radicado 2020_1653186 (fl.4) en la que insistió en la solicitud de cumplimiento de los fallos judiciales de primera y segunda instancia dentro del proceso radicado No. 2016-00150

3.3. Del derecho constitucional fundamental violado

Frente al derecho fundamental de petición, su protección se encuentra contemplada en el artículo 23 de la Carta, y reviste gran importancia en nuestro ordenamiento jurídico, como quiera que permite la comunicación directa y efectiva entre la Administración y los ciudadanos.

Según lo ha establecido la jurisprudencia constitucional, el contenido del derecho de petición no comporta recibir cualquier información, sino una **respuesta clara, precisa, de fondo y de manera congruente con lo solicitado**¹, lo que significa que el derecho a presentar peticiones se vulnera siempre que el obligado a responder, **no lo hace dentro del término previsto en el ordenamiento jurídico** y cuando la respuesta evade la solicitud planteada; es decir, en los casos en que la autoridad no resuelve de fondo el asunto que le fuera planteado.

La Corte Constitucional se ha pronunciado acerca de este derecho, en los siguientes términos²

*(i) El derecho de petición es fundamental; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) **la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna**, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) **la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible**³; (v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares⁴; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición⁵ pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa⁶; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder;⁷ y (x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado.⁸*

El derecho de petición fue regulado de manera específica por el legislador, quien ha impuesto la obligación a las entidades de pronunciarse en precisos y determinados términos. En efecto, el artículo 14 de la Ley 1755

¹ En las sentencias T-377 de 2000, MP. Alejandro Martínez Caballero y T-1060 A de 2001, MP. Manuel José Cepeda Espinosa, fueron sintetizadas las líneas características del derecho de petición.

² Ibidem.

³ Sentencia T-481 de 1992, M.P. Jaime Sanin Greiffenstein.

⁴ Al respecto véase la sentencia T-695 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

⁵ Sentencia T-1104 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda.

⁶ Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.

⁷ Sentencia 219 de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz.

⁸ Sentencia 249 de 2001, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

de 2015, dispone que: **i)** toda petición, salvo aquellas cuya resolución esté sometida a un término especial, debe resolverse dentro de los **quince días** siguientes a su recepción; **ii)** las peticiones que versen sobre documentos e información deben resolverse dentro de los diez días siguientes a su recepción; y **iii)** las peticiones por las cuales se eleve una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo, deben resolverse dentro de los treinta días siguientes a su recepción.

3.4. Del problema jurídico

El **problema jurídico** se concreta en establecer si **Colpensiones** ha vulnerado los derechos fundamentales de petición y debido proceso.

3.5. Caso concreto

En el presente asunto, se encuentra acreditado que mediante petición de fecha 6 de febrero de 2020, la accionante solicitó a Colpensiones el cumplimiento de fallo de primera y segunda instancia proferida dentro del proceso 2016-0150 que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación, aportando además nuevamente formularios CETIL de la vida laboral de la accionante en DIAN, ICBF y MINISTERIO DE EDUCACIÓN, pese a que el fallo ordenó la reliquidación de la pensión con el último año de servicios y no de toda la vida laboral.

De dicha petición no se ha acreditado por parte de Colpensiones la respectiva respuesta de fondo, oportuna, completa y congruente, ni previo a la activación de la presente acción constitucional y tampoco durante su trámite.

De ahí que la accionante aduce vulnerados sus derechos fundamentales de **petición y debido proceso**, debido a la falta de respuesta de fondo a la solicitud por cuenta de la parte accionada.

Así las cosas, la petición radicada por la accionante el día **6 de febrero de 2020** debe ser entendida en los términos previstos en el artículo 14 de la Ley 1755, es decir, que la entidad contaba con **quince (15) días** para pronunciarse, término que feneció el **21 de febrero de 2020**.

A la fecha de la presente providencia, la solicitud presentada por la accionante correspondiente al radicado No. 2020_1653186 de fecha 6 de febrero de 2020 (fl.4), no ha sido resuelta de manera oportuna, completa, congruente y de fondo por cuenta de la accionada Colpensiones.

La entidad accionada no respondió el requerimiento hecho por el Despacho en el auto admisorio de la demanda de fecha 10 de marzo de 2020.

Entonces, al evidenciarse que no obra respuesta oportuna, completa, congruente y de fondo a la solicitud presentada por la accionante ante la mencionada entidad, el Despacho encuentra acreditada la vulneración del derecho fundamental de petición.

En consecuencia, se amparará dicho derecho fundamental de CARMEN ALCIRA RODRÍGUEZ RUBIO y se ordenará a Juan Manuel Villa Lora Presidente de Colpensiones, o quien haga sus veces, que en el término de **CUARENTA Y OCHO (48) HORAS** contado a partir de la notificación de la presente decisión remita respuesta de fondo y efectiva respecto de la solicitud elevada por la accionante en escrito correspondiente al radicado No. 2020_1653186 de fecha 6 de febrero de 2020 (fl.4).

Respecto de la alegada vulneración del derecho al debido proceso, no encuentra el Despacho prueba aportada por la parte actora, ni evidencia de acciones u omisiones por parte de la entidad accionada, que den luces y ofrezcan certeza al Despacho sobre la amenaza a dicho precepto, por lo cual no se tutelaré en este momento.

Con fundamento en los anteriores argumentos, este estrado judicial resuelve el problema jurídico, en el sentido de declarar que **Juan Manuel Villa Lora en su calidad de Presidente de Colpensiones** vulneró el derecho fundamental de petición de la accionante, al no haber emitido una respuesta oportuna, completa, congruente y de fondo a las peticiones elevadas por la accionante.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

IV. FALLA:

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la accionante CARMEN ALCIRA RODRÍGUEZ RUBIO, de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente fallo.


SEGUNDO: ORDENAR A JUAN MANUEL VILLA LORA PRESIDENTE DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, o quien haga sus veces, a través de la dependencia correspondiente, que en el término de **CUARENTA Y OCHO (48) HORAS** contado a partir de la notificación de la presente decisión remita respuesta **OPORTUNA, COMPLETA, CONGRUENTE Y DE FONDO** respecto de la solicitud elevada por la accionante en escrito correspondiente al **radicado No. 2020_1653186 de fecha 6 de febrero de 2020**. La entidad acreditará al Despacho el cumplimiento de la presente decisión.

TERCERO: No amparar el derecho al debido proceso, de la actora, de conformidad con las consideraciones expuestas.

CUARTO: Por Secretaría, notificar el presente fallo en la forma establecida por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: En firme la presente providencia y en el evento en que no fuere impugnada, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ÁLVARO CARREÑO VELANDÍA
Juez